

ENTRE LA POLÍTICA, LA ECONOMÍA Y EL DISCURSO. LA PROTESTA CONTRA LA DICTADURA FRANQUISTA EN LA PROVINCIA DE ALBACETE, 1970-1976.¹

Óscar J. Martín García.

1. Cambios, aperturas y extensión del conflicto.

Algunas de las interpretaciones de la transición a la democracia en España que consideran que la “naturaleza de los actores en la lucha y sus relaciones” son factores de primer orden “para comprender el resultado del proceso” de cambio político, habitualmente han encontrado en el crecimiento económico, el cambio social y las profundas transformaciones culturales experimentadas por el país durante los años sesenta los catalizadores de la conflictividad que contribuyó a desgastar decisivamente a la dictadura franquista y a crear las condiciones políticas en las que tuvo lugar la fase de democratización.² Sin embargo, en ciertas ocasiones la importancia, casi determinante, conferida a los condicionantes socioeconómicos ha conducido a la “idea de que la democracia fue virtualmente inevitable, o al menos muy probable, dado el nivel de desarrollo económico” alcanzado por el país a la altura de la muerte de Franco.³ De manera tal que para toda una línea de estudios sobre el caso español el “*milagro político* de la transición ha sido convertido en el inevitable corolario del *milagro económico* del tardofranquismo”.⁴ No obstante, lejos de establecer una unívoca relación causa-efecto, el acelerado crecimiento económico y la impetuosa dinámica social fueron factores muy importantes a tener en cuenta en la reactivación del conflicto en la España de los años sesenta. Sobre todo porque las fuerzas desatadas por los mismos requirieron, para ser

¹ Publicado en *Historia Contemporánea*, 36, 2009.

² Sidney Tarrow, “Mass Mobilization and Regimen Change: Pacts, Reform and Popular Power in Italy (1918-1922) and Spain (1975-1978)” en R.Gunther, N. Diamandouros y H.Puhle, *The Politics of Democratic Consolidation*, John Hopkins Press, Baltimore, 1985, p. 209.

³ Donald Share, *The Making of Spanish Democracy*, Centre for the Study of Democratic Institutions, Londres, 1986, p. 27.

⁴ Nigel Townson (ed.), *Spain Transformed. The Late Franco Dictatorship, 1959-1975*, Palgrave, Nueva York, 2007, p. 10.

asimiladas y canalizadas, de modificaciones en el perfil variable de las instituciones y en las estrategias políticas de la dictadura, como la Ley de Convenios Colectivos de 1958 y la ampliación de los mecanismos de participación sindical en 1966, que, a su vez, trajeron consigo un “cambio en el marco de oportunidades y expectativas” para la movilización de la clase trabajadora.⁵ Así, las transformaciones socioeconómicas y políticas configuraron una nueva estructura de oportunidades que al reducir los costes de la acción y permitir la acumulación de nuevos recursos organizativos entre un número creciente de colectivos obreros facilitó y dinamizó el crecimiento de las luchas sociales y de la agitación política durante los años finales del franquismo.⁶

Sin embargo, el círculo movilizador relanzado por la conjunción entre el impulso económico, industrial, y urbano, las reformas políticas y la transformación en los hábitos y actitudes de los españoles producto del cambio social adoleció de importantes diferencias regionales. El ciclo de protestas que se extendió por algunas partes del país -sobre todo por Cataluña, el País Vasco, Asturias y Madrid- durante la década de los sesenta se vio entorpecido por importantes obstáculos estructurales en provincias como Albacete. En este “trozo deprimido de España”, la emigración masiva, el subdesarrollo económico y el retardo social, la exclusión de las políticas desarrollistas de planificación indicativa, el minifundismo empresarial, la preeminencia de un arcaico sector agrario y el control tanto de la negociación colectiva como de los mecanismos sindicales por parte de los adocenados burócratas verticalistas redujeron a la mínima expresión las posibilidades del conflicto abierto. No extraña, por tanto, que, como apuntó un informe oficial sindical en 1967, la “distribución de la población activa y el

⁵ Joe Foweraker, *La democracia española. Los verdaderos artífices de la democracia en España*, Arias Montano Editores, Madrid, 1990, pp. 106-110. También Alberto Gómez Roda, *Comisiones Obreras y represión franquista, Valencia, 1958-1972*, Universitat de Valencia, Valencia, 2004, p. 96.

⁶ Xavier Domenech, *Quan el carrer va deixar de ser seu. Moviment obrer, societat civil y canvi polític. Sabadell 1966-1976*, Publicacions de L'Abadia de Montserrat, Barcelona, 2002, p. 355. También José Babiano, *Emigrantes, cronómetros y huelgas. Un estudio sobre el trabajo y los trabajadores durante el franquismo (Madrid, 1951-1977)*, Siglo XXI, Madrid, 1995, p. 343

reducido tamaño de los establecimientos industriales” hiciesen que en la provincia de Albacete el “desarrollo de la vida laboral discurra por cauces de general normalidad” y en ausencia de huelgas. Así, la dispersión, el aislamiento, la eventualidad y el severo control social redujeron las formas de reivindicación a los repertorios más accesibles en aquellos escenarios atrasados donde las condiciones estructurales y políticas hicieron de la rebelión abierta algo excepcional, siendo habituales las acciones de resistencia anónimas e individuales como el absentismo, los sabotajes y hurtos, o aquellas relacionadas con las formas tradicionales de autodefensa popular como el impago de las cuotas de las Hermandades Sindicales, la ocultación de la cosecha, etcétera.⁷

Esta estampa en la que el malestar era expresado únicamente a través de las tradicionales respuestas estratégicas de adaptación –desde el boicot, a la desobediencia pasando por la burla y el rumor- de los colectivos más débiles a contextos subdesarrollados y represivos, comenzó a cambiar desde finales de los años sesenta y principios de los setenta. Dicho cambio fue debido, en parte, al generalizado crecimiento de las protestas que se extendieron por todo el país desde comienzos de la nueva década. De hecho, el año 1970 “señaló un punto álgido en la evolución de la conflictividad laboral en España”. Según fuentes del Ministerio de Trabajo, durante dicho ejercicio se multiplicaron por más de tres y de cuatro respectivamente el número de trabajadores en conflicto y de horas perdidas en huelga en relación a 1968. Desde entonces la gráfica de la conflictividad, excepto el breve paréntesis entre 1971 y 1972, nunca dejó de aumentar y siempre se mantuvo en unos niveles muy superiores a los registrados durante la década anterior.⁸ Este aumento en los índices de contestación social fue a la par causa como reflejo de la extensión geográfica del conflicto y de su

⁷ Óscar J. Martín García, *A tientas con la democracia*, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2008, pp. 25-40.

⁸ Carme Molinero y Pere Ysàs, *Productores disciplinados y minorías subversivas. Clase obrera y conflictividad laboral en la España franquista*, Siglo XXI, Madrid, 1998, pp. 105 y 185.

propagación, con diferente frecuencia e intensidad, a nuevos sectores socioprofesionales.⁹ En efecto, como dice Tarrow, los “ciclos de protesta movilizan a los organizados pero también organizan a los desmovilizados”.¹⁰ Así, cada vez con mayor insistencia y decisión, colectivos laborales radicados en provincias subdesarrolladas como Albacete siguieron el camino, por imitación y extensión, abierto años antes por los asalariados, “adelantados” o “iniciadores”, de los grandes centros industriales del país. Éstos, a través del efecto expansivo y del ejemplo proporcionado por su acción, fueron poniendo al descubierto los flancos vulnerables de la dictadura y abriendo espacios para la movilización de nuevos grupos de trabajadores.¹¹

En la provincia de Albacete, este proceso de difusión de la protesta, aunque con expresiones espontáneas, fue principalmente articulado por organizaciones comunistas y cristianas, cuyos medios de comunicación, coordinaciones de zona y asambleas territoriales facilitaron a sus militantes el contacto, el conocimiento y la asimilación de nuevas realidades más convulsas y en abierto desafío contra las estructuras de la dictadura. En la transmisión de los ecos del descontento desde el centro del conflicto a la periferia también cumplieron una importante función propagadora los activistas asturianos, gallegos o vascos desterrados por el régimen a las zonas rurales y menos contestatarias, y los jóvenes albacetenses socializados políticamente a través del movimiento estudiantil en universidades de Valencia, Madrid, Salamanca, Granada,

⁹ Aunque en algunos estudios se ha hecho hincapié en la extensión socioprofesional del conflicto durante la década de los setenta a grupos de “cuellos blancos”, técnicos y funcionarios, apenas ha recibido atención la propagación geográfica de la misma, siendo la protesta protagonizada por los asalariados de provincias con un menor grado de desarrollo socioeconómico “relegadas a un segundo plano, cuando no abiertamente preteridas por la historiografía especializada de los últimos años”. Han contribuido a llenar ese vacío, entre otros ejemplos, Francisco Cobo y Teresa Ortega, “La protesta de sólo unos pocos. El débil y tardío surgimiento de la protesta laboral y de la oposición democrática al régimen franquista en Andalucía oriental” en *Historia Contemporánea*, 26, 2003, pp. 113-114 y Manuel Ortiz Heras (coord.), *Movimientos sociales durante el final del franquismo y la transición en Castilla-La Mancha, 1969-1979*, Ediciones Añil, Ciudad Real, 2008.

¹⁰ Sidney Tarrow, *Struggle, Politics and Reform: Collective Action, Social Movements and Cycles of Protest*, Cornell University, Western Society Program, Occasional Paper, nº 21, 1991, p. 47.

¹¹ Xavier Domenech, *Clase obrera, antifranquismo y cambio político*, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2008, pp. 327-331.

Murcia, etcétera. Ambos, en su obligado “ostracismo manchego” en el caso de los primeros, o al “regresar al pueblo” los fines de semana o en periodos vacacionales en el caso de los segundos, llevaron consigo modelos para la acción colectiva, marcos maestros y estructuras de movilización que fueron difundidas entre las redes de adherentes en centros parroquiales, clubes juveniles, salones jocistas, etcétera, de la provincia de Albacete.¹² A través de dichas dinámicas se transmitieron las herramientas, organizativas pero también simbólicas y referenciales, que propiciaron la “identificación mutua de actores de diferentes enclaves como suficientemente similares entre sí para justificar la acción conjunta”.¹³ De este modo, mediante los cauces antes descritos se canalizaron recursos y discursos que tendieron puentes entre reivindicaciones e identidades de colectivos procedentes de diferentes partes del país que, conforme avanzó la década de los setenta, se encontraron e insertaron en una lucha nacional por la distribución de los resortes del poder político. De hecho, las propias autoridades franquistas de Albacete reconocieron en 1971 que el “ambiente general de la provincia ha sido de inquietud” y “alarma en ciertos momentos” como “reflejo de lo mismo en el ámbito nacional”.¹⁴

Como resultado, según fuentes oficiales, desde 1968 fue perceptible el creciente “descontento general” en ciertos sectores laborales de la provincia de Albacete, reproduciéndose al año siguiente “tensiones conflictivas en algunas empresas, especialmente en Construcción, Hostelería, Transportes e Industrias Químicas”. Sin olvidar la “politización tan enorme que tenía”, a juicio de los jerarcas verticalistas, el

¹² Damián González y Óscar J. Martín García, “Desde abajo y en la periferia del desarrollismo. Cambio político y conflictividad social en La Mancha, 1962-1977” en Damián González (coord.), *El franquismo y la transición en España. Desmitificación y reconstrucción de la memoria de una época*, Los Libros de la Catarata, Madrid, 2008, p. 143.

¹³ Doug McAdam, Sidney Tarrow y Charles Tilly: *Dinámica de la contienda política*, Hacer, Barcelona, 2005, p. 294.

¹⁴ Archivo Histórico Provincial de Albacete (AHPA). Fondos de la Organización Sindical (OS). Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias (1971). 26 de enero de 1972. Caja 2133.

Sindicato de la Banca.¹⁵ Los informes policiales resaltaron el incipiente aumento desde inicios de los setenta de las “actividades de los grupos de oposición sindical”, sobre todo de movimientos cristianos en las fábricas del Calzado de la zona de Almansa y de las Comisiones Obreras en el sector agrícola de Villarrobledo.¹⁶ También por aquel entonces, en la combativa localidad de Villamalea, conocida en la comarca como el “pueblo rojo”, se pusieron en funcionamiento las Comisiones Campesinas que, según la policía, actuaban en conexión con el PCE, unas veces “secundando campañas de agitación nacional y otras aprovechando la fricción cotidiana entre administración y administrados”.¹⁷ En definitiva, como reconoció en 1969 el gobernador civil, “contrariamente a lo que venía sucediendo [...] se aprecia en general una mayor preocupación por las cuestiones políticas” de una ciudadanía cuyas “aspiraciones se centran en una progresiva democratización de las instituciones”.¹⁸

2. Amenazas materiales y oportunidades políticas.

Tras el reflujo en los niveles de movilización registrado en 1971 y 1972, desde 1973, y muy especialmente después del magnicidio de Carrero Blanco en diciembre de dicho año, la conflictividad a nivel nacional aumentó notablemente hasta el final de la dictadura. Por ejemplo, durante 1974 el número de trabajadores en conflicto se multiplicó por más de cinco y el de horas perdidas por más de siete en relación a 1968. Una dinámica también perceptible en la provincia de Albacete, donde a finales de 1973 las autoridades gubernativas contemplaron con disgusto que “en el que pudiéramos

¹⁵ AHPA. OS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias, 1968. 13 de enero de 1969. Caja 2133.

¹⁶ AHPA. Fondo del Gobierno Civil (GB). Memorias del Gobierno Civil, 1970. 12 de enero de 1971. Caja 2402.

¹⁷ Citado en Óscar J. Martín García, “Albacete: de la balsa de aceite a la conflictividad social” en Manuel Ortiz Heras (coord.), *Los movimientos sociales en la crisis de la dictadura y la transición: Castilla-La Mancha, 1969-1979*, p. 34.

¹⁸ Archivo Histórico del Gobierno Civil de Albacete (AHGC). Memorias del Gobierno Civil, 1969. 23 de enero de 1970. Caja 11.

llamar sector de oposición, se ha observado un mayor movimiento”.¹⁹ Ha sido un lugar común en la historiografía especializada del periodo, influida por el paradigma frustración-acción colectiva largamente cultivado por las ciencias sociales, considerar que la súbita irrupción de la crisis económica en 1973 fue condición suficiente para desatar un significativo reguero de huelgas contra la dictadura por todo el país. En efecto, no pueden soslayarse los efectos sociales que la desenfadada inflación, el estancamiento de los salarios y el crecimiento del desempleo provocaron sobre las maltrechas economías de una clase trabajadora que, como en el caso de la albacetense, a la altura de abril de 1974, encontró, según fuentes oficiales, en todo punto imposible “aspirar a la propiedad de la vivienda, mobiliario de ciertas características y por supuesto del disfrute de vacaciones fuera de su domicilio”.²⁰

Además, los efectos de la crisis, unidos al endurecimiento de la actitud patronal y a la política gubernamental de rentas, deterioraron la capacidad de la negociación colectiva para mantener los niveles de vida de los trabajadores. El resultado fue el endurecimiento de la negociación colectiva y el tensionamiento de la situación social. Así lo puso de relieve un informe de la Delegación Comarcal Sindical de Almansa al observar la “creciente inquietud y desasosiego” entre la masa laboral que ante las “limitaciones salariales” reivindicaba mejoras sociolaborales y asistenciales “unas justas y, otras, exageradas” y se veía cada vez más instigada a utilizar “coacciones y represalias” ante los representantes sindicales oficiales y los patronos.²¹ Así, bajo esta tan desfavorable como inflamable coyuntura económica las autoridades detectaron desde 1974 un “enrarecimiento en la clase trabajadora” de la provincia, un agravamiento en la inquietud social ante el “paulatino pero constante incremento de

¹⁹ AHGC. Memorias del Gobierno Civil, 1973. 27 de enero de 1974. Caja 11.

²⁰ AHPA. OS. Secretariado de Asuntos Sociales y Jurídico Laboral. Correspondencia Gobierno. 14 de abril de 1974. Caja 2192.

²¹ AHPA. OS. Delegación Comarcal de Almansa. 25 de junio de 1974. Caja 3874.

trabajadores en situación de desempleo” y un “malestar general creciente por las constantes subidas en los artículos de primera necesidad”. Atizado todo ello, además, por la labor de la “minorías subversivas” en los centros de trabajo.²²

Como se puede apreciar, el abrupto revés provocado por la profunda crisis económica internacional que puso el súbito punto y final a una larga fase de prosperidad provocó el descontento y una mayor disponibilidad para la acción de los trabajadores. De hecho, éstos no sólo se movilizan cuando acceden a los recursos necesarios para salir de la pasividad sino también cuando perciben una fuerte amenaza – en forma de inflación, control salarial, crecimiento del desempleo, ineficacia de la contratación colectiva y endurecimiento patronal- que hace que los costes de la inacción sean mayores que los causados por la propia movilización. Por tanto, si como toda una tradición de estudios indica, la protesta de los trabajadores a menudo está más relacionada con contextos de desarrollo económico que con situaciones de privación,²³ cómo explicar, como señaló *Gaceta de Derecho Social*, que a la altura de 1974 la “depresión y el paro crecientes, en lugar de frenar y atemorizar a la clase trabajadora como hiciera en otras épocas” estuviesen “actuando como acicates en la lucha reivindicativa”.²⁴ La respuesta para explicar la conjunción entre unos altos niveles de convulsión sociopolítica y el punto de inflexión final de la etapa económica expansiva debe de tener en cuenta que la depresión hizo acto de presencia de forma paralela a la crisis final del franquismo, bajo un ambiente de creciente incertidumbre e inestabilidad política.

²² AHGC. Memorias del Gobierno Civil, 1974, 25 de enero de 1974.

²³ Entre otros ejemplos, pueden consultarse Edward Shorter y Charles Tilly, *Las huelgas en Francia, 1830-1968*, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid 1985; Anthony Oberschall, *Social Conflict and Social Movements*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, 1973 y James Cronin, “Estadios, ciclos e insurgencias: la economía del malestar social” en Leopoldo Moscoso y José Babiano (comps.): *Ciclos en política y economía*. Fundación Pablo Iglesias, Madrid, 1992.

²⁴ Fundación Primero de Mayo (FPM). Archivo de Historia del Trabajo (AHT). *Gaceta de Derecho Social*, 40-41, octubre de 1974, p. 11.

En otras palabras, los desfavorables factores económicos desarrollaron una importante capacidad de movilización al emerger en un mismo tiempo y lugar junto a la conjunción de una serie de acontecimientos de significación política –como la profundización de las divisiones en el seno de la dictadura, el empeoramiento en el estado de salud de Franco, los proyectos de apertura oficial, la caída revolucionaria del régimen salazarista en Portugal, la continuada negativa a la entrada de España en la CEE y en la OTAN, etcétera- que contribuyeron a debilitar a la dictadura y, por lo tanto, a abrir nuevas oportunidades para el ataque de sus oponentes. De manera tal que el aumento de la conflictividad a partir de 1974 no fue –como trataron de hacer ver los burócratas de la OS albacetense con el fin de despolitizar el descontento- simplemente la reacción espasmódica de los trabajadores ante el “desequilibrio en la balanza de precios y salarios, fulminantes de la conflictividad laboral”. Más bien se trató de la respuesta de dichos trabajadores que percibieron en la acción la herramienta más eficaz para presionar por sus reivindicaciones laborales y políticas en un contexto de crisis económica y mayor vulnerabilidad de la dictadura.

Ante este marco social, político y económico no extraña, como señalaron los gobernantes provinciales, que durante los últimos años del franquismo fuesen cada vez más los trabajadores que en Albacete se dejaron “arrastrar por la postura antisindical [en contra de la OS]” promovida por militantes del apostolado, curas obreros y unos activistas de la oposición cada vez mejor organizados. De este modo, la presencia de estructuras organizativas cristianas y comunistas en diferentes sectores como la banca, el textil, la sanidad o la enseñanza hicieron más vigorosas, para la oficialidad, las “pretensiones de complicar el ambiente laboral claramente con motivaciones de orden político”.²⁵ En resumidas cuentas, la coyuntura económica no fue más que el marco

²⁵ AHPA. OS. Secretariado de Asuntos Económicos. Memorias, 1974. 25 de enero de 1975. Caja 2133.

sobre el que se desarrolló un nuevo escenario político que alimentó nuevas expectativas y aspiraciones de cambio entre crecientes sectores de la población albacetense cada vez más críticos con la dictadura. Por tanto, si las hostiles condiciones económicas aumentaron la disponibilidad de salir a la calle -como movilización defensiva contra una perturbadora amenaza para la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores- durante la parte final del franquismo, dicha acción también estuvo estrechamente relacionada con la dinámica del poder político en aquellos años.²⁶

Buen ejemplo de ello fue el estallido huelguístico que siguió a la muerte de Franco en noviembre de 1975 y que supuso que durante 1976 el número de conflictos fuese más de 110 veces superior al registrado en 1968. Mientras tanto, la cantidad de trabajadores en huelga aumentó casi 20 veces en relación al citado año de referencia y el de horas perdidas fue 55 veces superior.²⁷ En aquellos meses se desencadenó un intenso ciclo movilizador que recorrió todo el país y que incluso en provincias como Albacete incluyó en la protesta a grupos poco familiarizados con la presión colectiva como los taxistas, fotógrafos, funcionarios de prisiones, enfermeras, etcétera. En esta provincia la muerte de Franco contribuyó a entrelazar las reivindicaciones laborales y específicas con la lucha general por el cambio político. No en vano, la Delegación de Trabajo informó que estaban “aumentando las tensiones conflictivas”, especialmente desde “finales del año 1975” como “reflejo de la situación nacional”. La propia OS reconoció que los trabajadores albacetenses no estaban siendo impasibles a “la serie de reivindicaciones sociolaborales que se han desatado en todo el país y que naturalmente, en nuestra provincia también se escucha el eco”.²⁸

De hecho, si algún aspecto fue reseñable en la memoria del gobierno civil de Albacete de 1976 éste fue, sin duda, “la intensa y extensa actividad desplegada por los

²⁶ Óscar J. Martín García, *A tientas con la democracia*, p. 96.

²⁷ Carme Molinero y Pere Ysàs, *Productores disciplinados y minorías subversivas*, p. 105.

²⁸ AHGC. Memorias del Gobierno Civil, 1975, 28 de enero de 1975. Caja 11.

denominados grupos de oposición”. Tanto que las autoridades provinciales contemplaron con desconcierto que si la “inactividad o atonía ha sido el denominador común en cuanto a la actuación de los llamados grupos de derechas”, dicha indolencia, por el contrario, “ha contrastado con la gran actividad llevada a cabo por miembros o simpatizantes del Partido Comunista, Joven Guardia Roja, Partido del Trabajo y Comisiones Obreras”²⁹. Una situación que no pudo dejar de alarmar a un régimen para el que toda alteración del orden, como transgresión de la legalidad, encarnó un desafío y una amenaza real a su supervivencia.³⁰ Sobre todo si dicho reto provenía de una provincia albacetense en las que poco antes las autoridades habían visto un “oasis en una España” crecientemente turbulenta. Todo lo cual, en último término remitió a la cada vez más habitual imitación desde finales de 1975, en lugares como Albacete, de lo reflejado en el turbulento *espejo político* de los centros industriales y urbanos más convulsos del país. Una llamada de atención, en definitiva, de lo que “podía suceder en un futuro no muy lejano en el resto de España, en el caso de que no hubiesen cambios políticos sustanciales”.³¹

Muy posiblemente la inestable situación económica y la renovación de un gran número de convenios influyeron en el amplio ascenso de la efervescencia sociopolítica desde los meses finales de 1975. Sin embargo, no hay que olvidar que las presiones en favor del cambio se intensificaron casi de forma exponencial debido a los efectos políticos de la desaparición del dictador. Sobre todo porque ésta abrió nuevas oportunidades para la protesta y desbordó las expectativas que influyeron decisivamente

²⁹ AHGC. Memorias del Gobierno Civil, 1976. 2-2-1977. Caja12.

³⁰ Pere Ysàs, “¿Una sociedad pasiva? Actitudes, activismo y conflictividad social en el franquismo tardío” en *Ayer*, 68, 2008, p. 57.

³¹ Xavier Domenech, *Quan el carrer va deixar de ser seu. Moviment obrer, societat civil y canvi politic. Sabadell 1966-1976*, Publicacions de L'Abadia de Montserrat, 2002, p. 327.

en la crecida de un vigoroso torrente de acciones colectivas.³² En este sentido, la muerte de Franco representó el gozne hacia uno de esos momentos en los que aquellos “menos valientes, pero más numerosos, vieron que el sistema era vulnerable a la protesta”³³. El resultado fue un notable aumento de la agitación social en favor del cambio político que no pudo ser desoído por los sectores reformistas del régimen, obligados éstos a articular una salida democratizadora al largo túnel de la dictadura en evitación de consecuencias imprevisibles en un contexto de intensa movilización y grave crisis económica. Así, aunque la democratización en España fue el resultado de las transacciones y pactos acordados en el espacio de la alta política, éstos estuvieron precedidos e influenciados por la política realizada a través de la presión en la calle. Las negociaciones entre las elites políticas se desarrollaron bajo el telón de fondo de una vigorosa movilización popular que influyó decisivamente en su resultado.³⁴ De esta forma, se puede concluir que las “negociaciones de los políticos” tuvieron “un corto alcance sin el suelo firme” de la pujante presión social que consiguió mediatizar e introducir sus principales demandas en la agenda política de la transición.³⁵

3. Marcos de acción colectiva. Redefiniendo lo tolerable.

Del apartado anterior se deduce que las bases de la acción colectiva que desgastó decisivamente al régimen franquista se encontraron íntimamente relacionadas con el contexto sociopolítico y económico existente durante los años finales de la dictadura. De hecho, parece innegable que la dinámica del poder político, junto a los

³² Manuel Pérez Ledesma, ““Nuevos” y “viejos” movimientos sociales en la transición” en Carme Molinero (ed), *La transición, treinta años después. De la dictadura a la instauración y consolidación democrática*, Península, Barcelona, 2006, p. 131.

³³ Sidney Tarrow, *Democracy and Disorder. Protest and Politics in Italy, 1965-1975*, Clarendon Press, Oxford, 1985, p. 339.

³⁴ Sebastian Balfour, *La dictadura, los trabajadores y la ciudad. El movimiento obrero en el área metropolitana de Barcelona (1939-1988)*, Edicions Alfons el Magnanim, Valencia, 1994, p. 208

³⁵ Nicolás Sartorius y Alberto Sabio, *El final de la dictadura. La conquista de la democracia en España. Noviembre de 1975-Junio de 1977*, Temas de Hoy, Madrid, 2007, p. 23.

requerimientos estructurales de oportunidad y organización, contribuye a explicar en buena medida la oscilación del conflicto durante el franquismo tardío. Sin embargo, a pesar de la importancia de este tipo de factores, no se puede reducir la acción de los sujetos colectivos a la mera respuesta mecánica al flujo y reflujo en la coyuntura política. Entre la estructura y la movilización median herramientas culturales necesarias para interpretar los problemas sociolaborales y los responsables del agravio sufrido.³⁶ Por esta razón parece aconsejable prestar atención a los marcos de referencia compartidos por los partidarios de los movimientos en tanto que construyeron una determinada percepción de la realidad circundante, confirieron sentido a la movilización y cohesión y solidaridad a la militancia.³⁷

Estas definiciones colectivas o esquemas interpretativos que simplificaron e hicieron inteligible el “*mundo de ahí fuera*”, facilitando un enjuiciamiento crítico de la realidad cotidiana, se elaboraron y difundieron a través de redes personales e interacciones informales anidadas en el devenir diario de la sociedad civil.³⁸ En el caso albacetense esta especie de micromovilización latente se encauzó a través de las actividades realizadas en espacios como salones parroquiales, asociaciones, escuelas jocosas, cooperativas, tabernas de los barrios, grupos vecinales o clubes en los que los jóvenes trabajadores “intentábamos hablar de los derechos de los aprendices, de los problemas del barrio, de la asociación de vecinos y tratar que la gente se comprometiera”.³⁹ En estos incipientes círculos -desde el Movimiento Junior, a los grupos de cursillistas pasando por asociaciones como la de Donantes de Sangre-

³⁶ Rafael Cruz, “La cultura regresa al primer plano” en Rafael Cruz y Manuel Pérez Ledesma, *Cultura y movilización en la España contemporánea*, Alianza, Madrid, 1997, p. 33.

³⁷ Hunt Scott, Robert Benford y David Snow, “Marcos de acción colectiva y campos de identidad en la construcción social de los movimientos” en Enrique Laraña y Joseph Gusfield (eds.), *Los nuevos movimientos sociales. De la ideología a la identidad*, CIS, Madrid, 2001, p. 234.

³⁸ David Snow y Robert Benford, “Master Frames and Cycles of Protest” en Aldon Morris y Carol McClurgh (eds.), *Frontiers in Social Movemet Theory*, Yale University Press, New Haven, 1992, p. 137.

³⁹ Seminario de Estudios del Franquismo y de la Transición (SEFT), 12 de diciembre de 2005, entrevista con Antonio Pérez, albañil, vecino de la barriada periférica de San Pedro y militante de la JOC.

proliferaron las relaciones interpersonales con compañeros de trabajo, familiares, amigos, vecinos y conocidos que “pensaban otras cosas” distantes de la paternalistas peroratas propagadas por el discurso y la propaganda oficial, y que, como resultado, “abrieron nuevas perspectivas” cuando los ultrajes y problemas fueron comentados e interpretados con los semejantes que “sufrían las mismas condiciones”, dando lugar a que más de uno comenzase a “analizar lo que nos rodea, a ver qué nos hace daño, a concienciarse de la realidad y a luchar para mejorarla”.⁴⁰ Así, como pudo comprobar la JOC provincial en 1972, algunos jóvenes trabajadores “por muy apáticos u oprimidos que estén, se transforman progresivamente y pasan de simples espectadores a actores” al hablar de sus problemas y analizar las causas de su situación.⁴¹ Como relata un activista antifranquista, “[todo] aquello [las excursiones, meriendas, competiciones deportivas, tertulias, asambleas, etcétera] parece que no tuvo importancia pero explica cómo nos hemos ido desarrollando después”.⁴² Una “auténtica universidad de la vida” en palabras de otro militante, pues propició las experiencias y explicaciones a través de las cuales más de un indeciso comenzó a reconocerse a sí mismo y, consecuentemente, a sus oponentes. No extraña, por tanto, que en 1970 la policía informase con recelo de las actividades que tenían lugar en Albacete con la participación de estudiantes, trabajadores y curas obreros “habiendo motivos suficientes para pensar que no se reducen sus conversaciones a asuntos religiosos”.⁴³

Un problema social no genera invariablemente un movimiento social si no existe una previa identificación y denuncia de aquel como intolerable. Rara vez una injusticia es una circunstancia objetiva claramente discernible, sino más bien el resultado de una

⁴⁰ SEFT. 23 de mayo de 2007, entrevista con Pepe Tendero, empleado en una gasolinera, enlace sindical, militante del PC [m-l] y de la Joven Guardia Roja. También, 28 de agosto de 2005, entrevista con Juani Carrilero, trabajadora del textil y militante de la JOC.

⁴¹ Archivo Histórico de la Juventud Obrera Católica (AHJOC). Zona de Levante-Sureste. Reunión de zona, 22 de octubre de 1972. Caja 95. Carpeta 1.11.

⁴² SEFT, 5 de junio de 2007, entrevista con Diego Martínez Junco, estudiante y militante en organizaciones católicas y de la izquierda revolucionaria.

⁴³ AHGC. Memorias del Gobierno Civil, 1970, 13 de enero de 1971. Caja 11.

definición construida colectivamente. Por tal razón, durante la década de los setenta en los espacios de intercambio social antes mencionados se elaboraron descripciones que redefinieron “como injusto o inmoral lo que previamente era considerado desafortunado, aunque tal vez tolerable”.⁴⁴ Así, de forma casi imperceptible, en los círculos de la sociedad civil se fueron construyendo nuevas interpretaciones de la situación que generalmente trataron de ser congruentes con los valores e intereses de sus participantes, utilizando un lenguaje asequible y ejemplos concretos fuertemente imbricados, como recuerda un militante comunista, en la “vida sencilla y cotidiana”, con el objetivo de obtener resonancia cultural, aceptación social y una alta credibilidad empírica. Por ejemplo, aquellos sacerdotes y consiliarios de “línea constestataria o progresista”, que, según las autoridades, estaban “tratando de predisponer a la clase trabajadora contra el orden establecido”, procuraron a través de la pedagogía activa y de las revisiones de vida “abrir los ojos un poco a la gente obrera”, “ayudarles a descubrir la injusticia sufrida”, “descubrir la implicación política que tiene nuestra explotación”. Decirles, en definitiva, a los trabajadores que, aunque a veces “no nos demos cuenta de nuestra situación”, el agravio cotidiano sufrido en las fábricas no era una desgracia, natural e inmovible, puesto que “no siempre ha habido pobres y ricos” y la “explotación de unos pocos a la mayoría no ha existido siempre y puede desaparecer” a través de la movilización por unas mejores condiciones de vida.⁴⁵

En efecto, no revistió consecuencias menores que en las descripciones de la realidad ventiladas en asambleas, ejercicios espirituales u en la elaboración de encuestas los problemas laborales dejasen de ser vistos como una desgracia irreversible para pasar a ser interpretados como algo “indigno e inmoral”, una injusticia que hacía necesario incidir “en las causas que provocan las consecuencias más generalizadas y

⁴⁴ David Snow y Robert Benford, “Master Frames and Cycles of Protest”, p. 137.

⁴⁵ *Cursillo de economía de la Juventud Obrera Católica*. JOC de Albacete. 15 de febrero de ¿1975?. Fondo privado de Jose Ruescas (FPJR).

aplastantes”.⁴⁶ Estrategia exegética también discernible en los cursillos de economía que organizaba la JOC y en los que se hizo hincapié en que no era casualidad, ni fortuito, ni accidental, el hecho de que “mi jefe, que no da golpe, puede cambiar de coche cada año, y nosotros no podemos permitirnos ningún capricho”.⁴⁷ Así, en aquellos nuevos espacios de la vida política pública autónomos de la ingerencia estatal, se fueron destilando críticas contra la situación existente en talleres, tajos, barrios, etcétera. Hecho de gran importancia si se tiene en cuenta que desde la esfera oficial y patronal “la realidad se ocultaba mucho” para que “no nos moviéramos”. Por lo que no llama a sorpresa que la JOC provincial se quejase en 1970 de las “dificultades que ponen las empresas para que los aprendices que en ellas trabajan puedan asistir a centros de enseñanza [del apostolado obrero] después de su jornada legal de trabajo”. No en vano, un grupo de militantes de Almansa señalaron en 1971 que gracias a las actividades desarrolladas en dichos centros la “gran mayoría de los jóvenes, ya desde aprendices, constatamos que nuestros representantes sindicales, que deberían velar por los derechos de toda la Clase Obrera, por distintos motivos no lo hacen”.⁴⁸

Por otra parte, conforme el Comité Provincial del PCE se reorganizaba a principios de los setenta y cada vez era más habitual, según los informes policiales, el reparto de “propaganda y panfletos subversivos” por calles, portales, y buzones de la capital provincial, también comenzó a repartirse en fábricas y oficinas el *Boletín Democrático de Información* del PCE, cuyo objetivo, como decían sus primeros números, era hacer conscientes a los ciudadanos de la provincia “de una vez por todas” de la “explotación y de la estafa que estamos siendo objeto”.⁴⁹ Con dicho fin acusador sus páginas trataron de desenmascarar abusos ante los cuales las autoridades habían

⁴⁶ AHJOC. Zona de Levante-Sureste. Reunión de zona, 25 de febrero de 1974. Caja 95, carpeta 1.11.

⁴⁷ *La iniciación en las JOC*. Ediciones de la Juventud Obrera Católica, 1975, pp. 8-9. FPJR.

⁴⁸ AHJOC. Zona Levante-Sureste. Diócesis de Albacete, 11 de octubre de 1970. Caja 96.

⁴⁹ FPM. AHT. *Boletín de Información Democrática*. Comité Provincial del PCE de Albacete, 4, agosto de 1974, pp. 3-5.

“buscado poner un oscuro velo sobre los ojos del pueblo español”. No extraña, por tanto, que el contenido de susodicho *Boletín* estuviese trufado de situaciones referenciadas bajo la palabra “engaño”, “abuso”, “atropello”, “fraude”, “estafa”, etcétera, que buscaban provocar la indignación y –según su discurso- necesitaban, para ser erradicadas, de la movilización de los ciudadanos de la provincia contra las estructuras autoritarias existentes. Asimismo, desde su creación en 1970 las Comisiones Campesinas sembraron los campos y las calles de los pueblos de volantes que hablaban de “injusticias intolerables”, de “bochornosas” actuaciones de los gobernantes y de “formas de pago injustas y discriminatorias” que hacían más agobiante aún la existencia cotidiana de los agricultores de la provincia y que necesariamente requerían una respuesta colectiva para hacer “posible su eliminación”. Por este motivo no pudo dejar de molestar a las autoridades provinciales el hecho de que en septiembre de 1974 el delegado sindical de Casas Ibáñez informase a sus superiores que algunos grupos “de madrugada tiraron en los caminos rurales propaganda subversiva, yendo ésta dirigida a los agricultores y diciéndoles, más o menos, *que abrieran los ojos, que el Gobierno los está explotando*”.⁵⁰

Por otro lado, según la policía, en la Cooperativa San Antonio Abad de Villamalea, en colaboración con la Asamblea Diocesana del Movimiento Rural, “charlas de carácter extrasindical se dieron a emigrantes” para que se rebelasen contra la situación tan misérrima en la que se encontraban sus familias. La creciente actitud crítica de algunas parroquias del mundo rural ante los profundos problemas económicos y sociales vividos en los pueblos de la provincia hizo que en 1974 los jerifaltes del Sindicato Vertical lanzasen una profunda investigación contra los “arciprestazgos de Elche de la Sierra, Yeste y la localidad de Villamalea”. Y ello fue debido a que en este

⁵⁰ AHPA. OS. Delegación Comarcal de Casas Ibáñez. 24 de septiembre de 1974. Caja 3689.

tipo de reuniones y encuentros se animó a los agricultores y trabajadores del campo a “denunciar los hechos” que contraviniesen sus intereses, a que “no se resignasen a que los expolien de esa manera” las clases dominantes de los pueblos y a “no consentir más abusos” por parte de patronos y jefes locales de las hermandades. Especial resquemor levantó entre los mandos provinciales del franquismo el caso de la localidad de Villamalea, donde el “ambiente en el pueblo es muy politizado, y es muy frecuente que en las tertulias en vez de discutir sobre el fútbol, con la misma pasión y como la cosa más corriente se discutan los problemas políticos locales, nacionales e internacionales”. Allí, la antes citada cooperativa vinícola, controlada por el PCE, patrocinó la creación de la biblioteca del municipio, de la cooperativa de consumo Robert Owen, del club de teatro, del equipo de fútbol, de los bailes obreros, del Club Bar Televisión y del Club de Amigos de la UNESCO, donde se organizaron charlas, conferencias, viajes, concursos artísticos, certámenes literarios y competiciones deportivas que siempre contaron con un reverso formativo y que representaron “ni más ni menos que un pretexto más para seguir reivindicando”. En el desarrollo de estas actividades el presidente de la cooperativa, un carismático líder comunista, “se nos acercaba [a los jóvenes del pueblo] y nos contaba lo que pasaba. Nos sentaba en un bar y nos contaba los problemas. Nos dejaba libros [...] Nos abrió los ojos a un sector de la juventud”. Por este motivo fue habitual que “en la banda de amigos hablásemos mucho de la cooperativa”, de sus reivindicaciones, de la emigración, del paro, de la situación del campesinado, etcétera.⁵¹ De este modo, a través de las relaciones y actividades desarrolladas en espacios sociales ganados al régimen aquello que anteriormente había sido aceptado como una desgracia fue, con más decisión conforme avanzaban los años setenta, denunciado como intolerable e ilegítimo con el fin de provocar la indignación que condujese a la protesta.

⁵¹ SEFT. 1 de junio de 2007, entrevista con Julián Gómez, militante del PCE en Villamalea.

Sin embargo, no siempre es “cosa fácil convencer a los más timoratos de que las indignidades de la vida cotidiana no están escritas en las estrellas, sino que pueden ser atribuidas a algún agente”.⁵² En efecto, un ingrediente importante de los marcos referenciales que nacieron de las prácticas cotidianas en el seno de redes informales fue la identificación de los responsables del agravio sufrido. Asignación de una culpabilidad, con tintes moralizantes, que debió de quedar meridianamente clara para los cientos de agricultores de Villamalea que acudían a las asambleas de la Cooperativa de San Antonio Abad, cuando escucharon decir en mayo de 1975 a su presidente que “el responsable de todo lo que ocurre es el ministro de Agricultura Sr. Allende y García Baxter”, claro exponente de “las fuerzas más reaccionarias y negras” que “nos están atacando” y “están llevando al campo al desastre”.⁵³ También eran culpables, según las Comisiones Campesinas, de la penosa situación vivida en el campo los “grandes capitalistas amparados por un gobierno de ladrones y sinvergüenzas”, que se estaban enriqueciendo de “manera tan infame” con “el dinero y el trabajo de la clases trabajadoras”.⁵⁴ De cualquier modo, fue bastante habitual que en los conflictos laborales que se desataron en los últimos años de la dictadura los trabajadores responsabilizasen ante la opinión pública de su situación a empresarios y autoridades franquistas. Por ejemplo, los empleados del Psiquiátrico de Albacete encerrados en el Obispado en diciembre de 1975 dispusieron de la páginas del periódico local *La Verdad* para señalar como “responsables de nuestra actitud a la Excma. Diputación Provincial [...] y a la OS, las cuales no han efectuado hasta ahora ningún intento por resolver nuestra angustiada

⁵² Sidney Tarrow, *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Alianza, 2004, p. 162.

⁵³ Citado en Benito Sanz, *Villamalea. Historia de un pueblo de Castilla-La Mancha, 1875-1977*, Ayuntamiento de Villamalea, 2003, p. 92.

⁵⁴ Archivo Histórico del Partido Comunista de España (AHPCE). Nacionalidades y Regiones. Comité Provincial de Albacete. Caja 67. Carpeta 5/3.

situación”.⁵⁵ En resumidas cuentas, cuando agricultores, vecinos o empleados públicos dirigieron su dedo acusador contra patronos, capitolos de las hermandades, autoridades, etcétera, pretendieron identificar a los responsables del agravio sufrido. Práctica que representó un aspecto necesario en el proceso de configuración de la acción colectiva en la medida en que señaló a otros actores como objetos de la propia acción para rectificar una situación calificada de injusta e inadmisibile.

4. “Nosotros” versus “Ellos”. Una única solución, la protesta.

La denuncia de un problema social y de sus responsables fue el reflejo de una conciencia diferenciada, expresión de la separación simbólica entre un “ellos” y un “nosotros”. En efecto, toda interpretación de la realidad con fines movilizados necesita de la descripción del enemigo común a través del emparejamiento antagónico de valores e identidades.⁵⁶ Así, en jornadas campestres, campamentos, caminatas, etcétera, organizadas por diferentes asociaciones, organizaciones y movimientos, se fue definiendo a un “nosotros” con similares problemas e intereses y en contraposición a un “ellos” antagonista, al que normalmente se atribuyeron maldades reales o imaginadas.⁵⁷ Dicho antagonista fue enmarcado como el oponente dentro de una dicotomía social a través de la cual se construyó la propia identidad al tiempo que se legitimó la acción contra los “enemigos”.⁵⁸ Por ejemplo, una práctica muy generalizada en las reuniones y coloquios del apostolado obrero fue incidir en “la existencia de dos clases” con “intereses contrarios entre sí porque defienden y luchan por causas distintas” y “nuestra pertenencia a una de ellas: la obrera, el pueblo, los explotados”. Como no podía ser de

⁵⁵ *La Verdad de Albacete*, 2 de enero de 1976, p. 3.

⁵⁶ Doug McAdam, Sidney Tarrow y Charles Tilly, *Dinámica de la contienda política*, pp. 61-65.

⁵⁷ Russell Hardin, *One for All. The Logical of Group Conflict*, Princeton University Press, Princeton, 1995, pp. 45-49.

⁵⁸ Manuel Pérez Ledesma, “La formación de la clase obrera: una creación cultural” en Rafael Cruz y Manuel Pérez Ledesma (eds.), *Cultura y movilización en la España contemporánea*, p. 225.

otra manera, en la otra parte se encontraban los “alegres derrochadores amparados y bendecidos por los poderes públicos”. Para muchos de los militantes jocistas, hoacistas y comunistas que habitaban en los deprimidos barrios periféricos de la ciudad de Albacete “esa minoría de privilegiados”, compuesta en el imaginario popular por “gente del régimen”, “jefes” y “burgueses”, vivían en un “estrecho eje marcado por una sociedad cerrada y jerarquizada en el que está integrado todo lo que suena y repercute, centros oficiales, cines, bancos, residencias”.⁵⁹ En las percepciones formadas en el día a día de la periferia, aquella representaba una ciudad oficial, lejana y hostil, quebrada por un proceso de articulación espacial y urbana de las divisiones de clase, y que hizo, que “*nosotros* nos sintiéramos del barrio, *nosotros* no nos sentíamos nunca de Albacete”.⁶⁰ De esta manera, a través de los vínculos de sociabilidad tejidos en los bares, plazas y calles de las barriadas obreras se fue promoviendo una redefinición de la situación vivida a partir de un lugar específico que tendió a representar al barrio como un espacio privativo de la comunidad, creada ésta sobre redes de reciprocidad y ayuda mutua y sustentada en una identidad autónoma.⁶¹ Una identidad opuesta en valores y en prácticas sociales a un “ellos” identificados con el centro de la ciudad en el que residía la “parte *señorita*, la de los poderosos y gobernantes, la parte que vivía bien y la parte comercial”.⁶²

Ciertamente, cada uno de los contendientes en esta suerte de recreación dual de la estructura social seleccionaron explicaciones y recursos simbólicos utilizados para deslegitimar al oponente, ganar el favor de la opinión pública y, consecuentemente,

⁵⁹ Carta de un militante comunista y vecino de una barriada albacetense, publicada en *La Verdad*, 23 de marzo de 1977, p. 6.

⁶⁰ SEFT. 12 de diciembre de 2005. Entrevista con Antonio Pérez.

⁶¹ Javier Hernández, *El Cerro del Águila e Hytasa: Culturas de trabajo, sociabilidad e imágenes de identificación*, Diputación de Sevilla, Sevilla, 1999, pp. 79-80.

⁶² SEFT. 5 de abril de 2006. Entrevista con Juan Fernández, cura obrero en los barrios de San Pedro y Pedro Lamata (Albacete) durante los años setenta y militante de la HOAC.

reforzar la identidad y cohesión interna.⁶³ De este modo, en las publicaciones y panfletos de las organizaciones obreras “ellos, los empresarios y burócratas del aparato verticalista”, habitualmente fueron encarnados, junto al signo del dólar, como “los cazadores escondidos” que “esperarán su oportunidad, para cerrar la boca al que quiere LIBERTAD”.⁶⁴ Por el contrario, en lo que verdaderamente representó una lucha centrada en el mundo de lo simbólico, la oficialidad, por su parte, batalló por desprestigiar las luchas emprendidas por los trabajadores más molestos. En el caso albacetense este extremo fue especialmente visible en el caso de las huelgas que se produjeron durante 1975 y 1976 en la educación y en la sanidad y que levantaron una importante atención mediática por afectar a servicios públicos básicos. En el discurso elaborado por las autoridades y sectores afines los colectivos en huelga fueron desacreditados por su irresponsabilidad y “falta de celo profesional”. Se trataba, según las atribuciones retóricas lanzadas desde el poder, de desequilibrados y egoístas enseñantes, médicos y personal sanitario que, atizados por la “tensión nerviosa” y a través de “vías de violencia”, abandonaron “sus obligaciones” poniendo en “peligro a los enfermos” y utilizando como “escudo de defensa” a los alumnos que “no reciben clase”.⁶⁵ Con la utilización de discursos de este tipo las autoridades no sólo participaron en el conflicto a través de la habitual represión sino también en la batalla por la atribución de significados de legitimación y deslegitimación. Ciertamente, aquel representó un momento privilegiado para la construcción social de las identidades de unos contendientes enzarzados en la confrontación por el control del mundo simbólico y por la definición del enemigo.

⁶³ Bert Klandermans, “The Formation and Mobilization of Consensus” en Bert Klandermans, Hans P. Kriesi y Sidney Tarrow, *From Structure to Action: Comparing Social Movement Research Across Culture. International Social Movement Research*, Jai Press, Greenwich, 1988, pp. 176-185.

⁶⁴ *Participando*. Boletín Informativo de la JOC del Sureste. Enero de 1976, p. 11. FPJR.

⁶⁵ Las referencias a esta “lucha simbólica” se pueden encontrar en el seguimiento que el diario *La Verdad* hizo de estos conflictos en los meses de julio y agosto de 1975, enero, febrero y noviembre de 1976 y febrero de 1977.

Además de en fábricas, hospitales, escuelas y barrios, en el medio agrario y rural de la provincia las Comisiones Campesinas fomentaron la identificación de un “nosotros” los “viticultores pequeños y medianos” en oposición al “enemigo jurado de nuestro pueblo”, representado éste por el “actual régimen político” que condenaba al agricultor al duro “trabajo y las deudas”. Merece la pena, de nuevo, llamar la atención sobre la localidad de Villamalea. Allí, la creación de una identidad colectiva como comunidad popular opuesta al régimen a partir de la definición del “otro”, personificado éste en la figura de un alcalde al que desde las asambleas de la cooperativa se tildaba de “soberbio y sin sentimientos sociales y humanos”, se vio robustecida por la existencia de densas redes de solidaridad, vínculos emocionales y valores compartidos. En Villamalea, las definiciones colectivas de la realidad que los militantes del PCE expusieron en organismo bajo su influencia como la Cooperativa San Antonio Abad, la Hermandad Sindical, la Caja Rural, etcétera, se superpusieron a las estructuras informales, y poco visibles, de la comunidad, contribuyendo así a la forja de un “nosotros” contra el que la utilización de la represión se hizo muy problemática para las autoridades locales del franquismo. En efecto, el trabajo abierto, realista, responsable y completamente comprometido con la defensa de los intereses generales del pueblo a través de las instituciones cooperativistas, sindicales y culturales facilitó una fuerte integración y prestigio de los militantes de la oposición dentro de la comunidad, lo que llevó consigo un cambio en la consideración social de la represión. De esta manera, el fuerte sentimiento comunitario atravesado por redes de solidaridad hizo a las autoridades “imposible golpearlos sin provocar movilizaciones”. Como dijo el presidente de la cooperativa local y líder comunista del movimiento viticultor “tengo que agradecer que las autoridades no nos dejasen tranquilos”, sucediéndose “conflicto tras conflicto” cuando los mandos franquistas intentaron neutralizar por los más

diversos medios a la oposición villamaleña, lo cual hizo que “nos unamos más, que haya solidaridad, y que se vea con interés nuestra gestión económica y social”.⁶⁶

En el caso tanto de los asalariados industriales y de los servicios, como en el de los pobladores de la periferia y los agricultores, de la mencionada recreación dual de la estructura social trascendió una definición colectiva del “nosotros” como víctimas del orden capitalista, que confirió a dichos colectivos un sentimiento de diferenciación social adobado con cierta conciencia de dignidad y orgullo. De hecho, en aquellos años las organizaciones obreras al margen del sindicalismo oficial “te hacían valorar de la clase que eras, que te enorgullecieras de ella y que lucharas por tener unas condiciones”.⁶⁷ Por esta razón, en el discurso de los grupos opuestos a la dictadura habitualmente ese “nosotros” quedó identificado, como señalaron las Comisiones Obreras albacetenses a finales de 1974, con “los verdaderos artífices del progreso” como el elemento productor de una riqueza social injustamente distribuida por el régimen en favor de un “ellos” representante de sólo “unos pocos” privilegiados. No extraña, por tanto, que los agricultores de Villamalea se quejasen en el verano de 1974 porque “hemos sido y seguimos siendo los principales contribuyentes a todo el desarrollo, en beneficio de unos cuantos que son los que se llevan el verdadero beneficio”.⁶⁸ Así, un elemento importante en la construcción de ese “nosotros” opuesto al franquismo fue su caracterización como víctima de la organización social y de la estructura política en la que se veían “atrapadas las clases populares” bajo la dictadura.

Por otro lado, si en reuniones y encuentros fue muy importante hacer que la gente se sintiera agraviada en algún aspecto de su vida, no fue menos esencial el hecho de que la misma gente se sintiera optimista respecto a la eficacia de la acción colectiva

⁶⁶ Citado en Benito Sanz, *Villamalea. Historia de un pueblo de Castilla-La Mancha, 1875-1977*, p. 280.

⁶⁷ SEFT. 15 de noviembre de 2005. Entrevista con Albertina Córdoba, vecina de la barriada del Mortero y militante de la JOC.

⁶⁸ FPM. AHT. *Boletín Democrático de Información*, 4, agosto de 1974, p. 7.

para solucionar sus problemas. A la identificación del agravio y de sus responsables fue unida la presentación de posibles soluciones que de manera general incluyeron una llamada a la movilización como mejor estrategia para deshacer el perjuicio sufrido. En una octavilla repartida a finales de 1973 las Comisiones Campesinas concluyeron que a los agricultores “sólo les queda una solución, hacer acciones y huelgas para que sean escuchados”.⁶⁹ Para los PNN de instituto la “única forma para presionar es la huelga, ya que no tenemos otra forma de hacernos escuchar como demuestra el hecho de que hayamos sido ignorados durante muchos años”. Los “problemas de los barrios si no se airean de alguna manera [...] no se solucionan” decían a finales de 1975 los habitantes de San Pedro.⁷⁰ Bajo este discurso, al tiempo que se ensalzaba la eficacia de la acción y su capacidad para conseguir mejoras laborales y políticas, se ponía de relieve la futilidad de la pasividad, pues, como arengaba a sus compañeros el representante de los veterinarios albacetenses, “nosotros siempre fuimos pacíficos y por eso siempre fuimos marginados”.

En el intento de legitimar la protesta como eficaz arma de lucha ante los ojos de un mayor número de trabajadores, los organizadores de los movimientos recurrieron a la comparación, haciendo hincapié en las mejoras sociolaborales y económicas que otros grupos habían ganado a través de la movilización. Por ejemplo, el Comité Provincial del PCE llamó a los asalariados albacetenses a imitar las formas de acción que habían conducido a la victoria a las trabajadoras del textil en el duro conflicto mantenido en la empresa López Vera en septiembre de 1974. A través de su boletín informativo provincial los comunistas señalaron con entusiasmo que el buen resultado cosechado por las operarias en el mencionado conflicto “ha constituido un gran ejemplo para todos los trabajadores de Albacete, y ha puesto de manifiesto que la lucha unida de los

⁶⁹ AHP.OS. Delegación Comarcal de Casas Ibáñez, 20 de diciembre de 1973. Caja 3689.

⁷⁰ *La Verdad de Albacete*, 28 de septiembre de 1975, p. 5.

trabajadores constituye el único camino a seguir para la defensa de los intereses de la clase trabajadora y contra la explotación capitalista”. De nuevo, en el otoño de 1974 desde las filas del PCE se insistió en transmitir a los asalariados que “el desarrollo de los más recientes conflictos laborales acaecidos en la península” reclamaban poderosamente “seguir el camino trazado por nuestros compañeros de otras regiones más avanzadas en la lucha”.⁷¹ En la misma línea, en 1976, cuando comenzaron a ser patentes las mejoras conseguidas en las barriadas de San Pedro y Pedro Lamata gracias a la labor de sus asociaciones, desde la incipiente agrupación vecinal de Puerta de Murcia se emplazó a todos los habitantes del barrio a tomar “ejemplo de ellos” y a “imitarles” en su lucha y compromiso, puesto que “los resultados habían sido positivos” en dichas zonas de la ciudad de Albacete gracias a la acción ciudadana. Asimismo la Asociación de Vecinos de Hermanos Falcó convocó a finales de 1976 a todos los barrios de la ciudad de Albacete a “animarse y conseguir crear sus propias asociaciones” pues “juntos conseguiremos más fuerza y seremos más escuchados”. Para la JOC “esto parte de los proverbios populares y está demostrado ahora y en toda la historia” que “sólo *TODOS JUNTOS* conseguimos cosas a las que tenemos derecho”.⁷²

En conclusión, las arrolladoras dinámicas económicas, sociales y culturales que experimentó el país durante la parte final del franquismo contribuyeron a mejorar el marco de oportunidades y expectativas para la acción colectiva contra la dictadura. Sin embargo, aún disponiendo de una importante virtualidad explicativa, la ampliación de la estructura de oportunidades no puede explicar en toda su complejidad, por tratarse de factores externos a la realidad de los movimientos, los procesos de movilización que desgastaron las bases de la dictadura franquista. Así, más allá de los necesarios análisis de las facetas organizativas, de las estructuras formales y de los aspectos más visibles de

⁷¹ AHPCE. Publicaciones Periódicas. Carpeta 45/6. *Boletín Democrático de Información*, 7, noviembre de 1974, p. 9.

⁷² *Avanzamos*. JOC Zona Sureste. Mayo de 1976, p. 10. FPJR.

la protesta, parece de gran interés profundizar en la interacción existente entre las fases de mayor visibilidad pública de todo movimiento social y aquellas de latencia que se desarrollan en el seno mismo de la sociedad civil.⁷³ Es decir, allí donde, a través de prácticas informales y redes de sociabilidad, se construyeron las definiciones e interpretaciones de la realidad circundante, constituyendo un “sistema de creencias” orientado a la acción, que legitimaron, dieron sentido y cohesión identitaria a la acción contra la dictadura franquista.

⁷³ Un planteamiento de este tipo en Enrique Laraña, *La construcción de los movimientos sociales*, Alianza Editorial, Madrid, 1999, p. 203.